

LA POSTGUERRA DEL CHACO EN BOLIVIA (1935-1939). CRISIS DEL ESTADO LIBERAL Y EXPERIENCIAS DE REFORMISMO MILITAR

Ferran Gallego
Universidad Autónoma
de Barcelona

En Junio de 1985 se cumplió el cincuenta aniversario del armisticio que puso fin a la guerra del Chaco, sin duda la de mayor envergadura registrada entre dos naciones americanas en el siglo XX. La escasez de trabajos dedicados en nuestro país a la historia contemporánea de Bolivia y Paraguay —por no decir de todo el continente—, hace comprensible, aunque desalentador, que la efemérides no se haya aprovechado para reflexionar sobre un aspecto tan relevante de la crisis de los años treinta en América Latina. Tal carencia justifica las páginas que siguen, restringidas a la postguerra de uno de los países envueltos en el conflicto, y cuyos planteamientos conllevan la obligada provisionalidad de toda primera aproximación.¹

Expansión y crisis en la Bolivia de principios de siglo

Suele hablarse de la «generación del Chaco» para designar tanto la quiebra del orden como las alternativas que le siguieron. Con todo, resulta conveniente no dejarse intimidar por la eficacia impresionista de un concepto que, si bien resalta la manifestación más rotunda de la fractura del sistema liberal, tiende a ale-

1. Este artículo resume una parte de la tesina que, con el título: *Del «socialismo militar» al populismo nacional. El M.N.R. en la crisis boliviana de mitad de siglo, 1936-1943*, presenté en la Universidad Autónoma de Barcelona en junio de 1985.

jarnos de su comprensión, emplazando la cronología y las causas de la crisis en el episodio bélico y el relevo generacional. Puede ajustarse más a la realidad ver en la guerra contra Paraguay un acelerador del agotamiento del antiguo régimen boliviano, cuyos síntomas se detectan en los enfrentamientos sociales de los años veinte, y cuyas raíces reposan en las insuficiencias de la opción de crecimiento adoptada en la segunda mitad del XIX.

La doble imagen de prosperidad económica y estabilidad política proyectada por la Bolivia de principios de siglo se confunde con la recuperación de su actividad minera y con la gestión del Partido Liberal. El estaño sustituyó a la plata en la cabecera de las exportaciones bolivianas tras la crisis de los yacimientos argentinos en los años 90.² Entre 1896 y 1926, el comercio exterior del país se multiplicó por 4,5. La participación del estaño en tal incremento supuso un 70,5% del total de las exportaciones en 1921-25.³ Era evidente que la potencialidad de crecimiento económico boliviano radicaba en la riqueza del subsuelo. Sin embargo, de esta evidencia podían desprenderse políticas distintas, cuando no antagónicas: el Partido Liberal había hecho una obsesiva referencia al progreso en sus programas, pero su gestión en poco se diferenció del aplastamiento del proteccionismo llevado a cabo por los conservadores en el XIX. La función del Estado no era dirigir su legislación aduanera contra la exportación del mineral en bruto para favorecer la fundición dentro de Bolivia, ni redistribuir el beneficio por medio de una política fiscal y unas inversiones públicas que propiciaran la diversificación económica y la integración del mercado nacional. Su función consistía en eliminar cualquier factor que pudiera desanimar la inversión en los yacimientos, prosiguiendo la obra ferroviaria iniciada en los años ochenta, y cuyo trazado se dirigía a conectar los centros de producción minera con el exterior, facilitando la entrada de productos agropecuarios y manufacturas procedentes de Chile, Perú o ultramar. No sólo se evitaba la creación de un mercado nacional, sino que se rompían mercados regionales que habían logrado sobrevivir a la política librecambista del conservadurismo. En el mismo esquema de evitar la introducción de factores desestimulantes en la actividad minera, debe constatarse una política fiscal que la privilegiaba. En las dos primeras décadas del siglo, los derechos sobre exportación supusieron un promedio del 12,98% de los ingresos totales del Estado.⁴ Falto de recursos para la realización de obras públicas y para nutrir una creciente administración, el Ejecutivo hubo de firmar empréstitos en el exterior que llevaron la deuda a 41.000.000 de bolivianos en 1919, cuando lo recaudado por el Tesoro Público no alcanzaba los 25.000.000.⁵

2. La mejor síntesis sobre la historia de la plata en el XIX boliviano es la de A. Mitre: *Los patriarcas de la plata. Estructura socioeconómica de la minería boliviana en el siglo XIX*, Lima, 1981.

3. Comisión Económica para América Latina, *El desarrollo económico de Bolivia*, México, 1958, pág. 7.

4. Peñaloza, L.: *Historia económica de Bolivia*, La Paz, 1953, Vol. II, págs. 220 y 227.

5. Para un análisis de los ingresos del Estado en la etapa liberal, véase McQueen, Ch.: *Bolivian Public Finances*, Washington, 1925.

Aun cuando el crecimiento económico se llevara sobre bases de tan exigua solidez, los efectos a corto plazo fueron de una estabilidad política sin precedentes —ni, mucho menos, continuidad— en la historia republicana. El liberalismo doctrinario de Ismael Montes, hombre fuerte del régimen y presidente por dos veces, no halló competencia en fuerza organizada alguna, exceptuando escaramuzas de tan escuálida entidad, que el Partido Liberal pudo presentarse a las elecciones de 1908, 1909 y 1913 en solitario. Mientras el régimen fue capaz de alimentar el crecimiento urbano que se disparó en estos años, mediante la oferta del sector de servicios, la República de Bolivia pudo presentar con orgullo al continente el ejemplo de una prolongada tradición civilista, sólo desmejorada por la marginación indígena y los episodios de resistencia rural que acompañaron la desintegración del ayllu.⁶

El consenso entre los grupos dominantes que caracterizó al liberalismo montista se rompió con la aparición del Partido de Unión Republicana, cuyo congreso fundacional se llevó a cabo en Oruro, en 1915. Superando el anecdótico de «oposiciones» que, de hecho, respondían a peleas familiares en el seno del liberalismo —caso de puritanos o «pateñistas»—, el Partido Republicano se convirtió en una fuerza respetable contra la que Montes hubo de emplear la violencia de los estados de sitio y el fraude electoral. Sin bases ideológicas claramente diferenciadas, el republicanismo basó su continuidad y éxito en haber sabido integrar distintos niveles de descontento en una sola organización. Al P.U.R. acudieron antiguos conservadores chuquisaqueños silenciados tras la guerra federal; artesanos y empleados que experimentaban las primeras dificultades serias de la economía boliviana, especialmente en los núcleos urbanos; los aspirantes a puestos en la administración que necesitaban un cambio de partido en el poder para obtener los derechos clientelares. Tratándose de un país que no había desarrollado industria alguna que no fuera la extractiva, no existía alternativa a la ocupación en el propio aparato del Estado. La propia expansión de la etapa liberal había engendrado realidades sociales que la lógica del sistema impedía digerir. Añadamos a estos factores la compleja articulación entre minería y latifundismo, y la misma oposición entre facciones de la industria del estaño —básicamente, entre Patiño y Aramayo— que sin dar lugar a partidos diferenciados por sí mismos, pueden decidir y consolidar una escisión iniciada en otros ámbitos. Cabe recordar, por último, la fase depresiva abierta con la Gran Guerra y que volvería a iniciarse poco antes del golpe republicano de 1920.

La revolución de julio de 1920 llevó al poder al Partido Republicano, justamente cuando afloraban los síntomas de la quiebra del orden tradicional, cuyos efectos de fondo quedarían aplazados por la guerra del Chaco. Los dos primeros pre-

6. Algunos momentos de esta resistencia indígena quedan reflejados en los trabajos de Rivera, S.: «Rebelión e ideología. Luchas del campesinado aymara del altiplano boliviano, 1910-1920», en *Historia Boliviana*, Cochabamba, 1981, págs. 83-99, y de Flores, G.: «Levantamientos campesinos durante el período liberal», en Calderón y Dandler, eds.: *Bolivia; la fuerza histórica del campesinado*, La Paz, 1984.

sidentes de la década se presentarían como superadores de la «vieja Bolivia», en momentos en que el avance hacia la gran depresión convertía a las instituciones liberales en órganos de integración y representación cada vez más obsoletos. Bautista Saavedra desplazó a sus competidores en la jefatura del partido mediante el recurso a las capas populares de La Paz, llegando a alcanzar influencia entre los primeros núcleos de clase obrera organizada. Su innegable astucia política le permitió detectar la necesidad de hacerse con las franjas más humildes, radicales y numerosas del partido, estableciendo con ellas una relación de caudillaje paternalista que conservaría, en gran parte, hasta su muerte. Fruto de esta relación fueron las que Saavedra llamaría orgullosamente primeras leyes sociales, limitadas bajo su mandato a algunas disposiciones sobre accidentes de trabajo y una aplicación parcial de la jornada de ocho horas. Al tiempo, se presentó como enemigo de la oligarquía minera elevando las tasas sobre beneficios. Sin embargo, la elevación de impuestos sólo se llevó a cabo en 1923, como respuesta desesperada a la caída de los ingresos estatales, que amenazaba con llevar a la quiebra el Tesoro Público. Las medidas fueron, además, tan insuficientes, que Saavedra hubo de firmar el empréstito Nicolaus, una de las operaciones financieras más escandalosas de la historia republicana. La dependencia del exterior sólo varió en la progresiva entrada de los intereses estadounidenses, a los que una confusa ley orgánica de petróleos permitió la exploración incontrolada del crudo boliviano hasta su nacionalización, en 1937. La misma relación paternalista establecida por Saavedra con los trabajadores bolivianos presuponía la más dura represión en caso de que éstos decidieran actuar por su cuenta. La masacre de Uncía o la de campesinos en Jesús de Machaca fueron los episodios más contundentes, pero en modo alguno los únicos, de intervención militar contra las reivindicaciones que rompían el pacto de clientela establecido entre el líder republicano y los cuadros de la «cholata».

Si Bautista Saavedra captó la necesidad de ampliar la base del republicanism recurriendo al apoyo de las capas populares urbanas, Hernando Siles, su sucesor en el Palacio Quemado entre 1926 y 1930, intentó hacerlo mediante un llamamiento a los universitarios y jóvenes profesionales sensibles a las ideas que atravesaban el continente en aquella década. La difusión del pensamiento marxista, del ejemplo mexicano, del aprismo y de las corrientes corporativistas se unieron a la descomposición de la economía boliviana, para extender un estado de opinión renovador que el presidente intentaría instrumentalizar y moderar a través del Partido Nacionalista.⁷ Su programa fue tan prudente que ni siquiera consiguió convencer a los que en principio habían optado por el silismo, creyéndolo la vía más segura de ruptura con el orden tradicional. Las propuestas aprobadas por el I Congreso Universitario y las que se articulaban en los sindicatos obreros rebasaron los planteamientos presidenciales, despojando al Partido de base has-

7. Sobre la formación de la Unión Nacional — más conocida como Partido Nacionalista, ver Céspedes, A.: *El dictador suicida*, Santiago de Chile, 1956, págs. 82 y ss.

ta convertirlo en un mero apéndice palaciego, que ganaba las elecciones porque ningún gobierno las perdió en Bolivia antes de 1951. La esclerosis del nacionalismo oficialista se sumó a la crisis del 29 para convertir la posición de Siles en insostenible. Las exportaciones de estaño alcanzaron su cifra récord en 1929, pero sólo para compensar con el volumen lo que se perdía con el precio, en descenso desde 1927. Los ingresos obtenidos por el Estado gracias a la producción del mineral se redujeron en 1930 a un 25% de lo que había sido en 1927.⁸ La misión Kemmerer, invitada por Siles al apuntar la crisis, emitió un desolador diseño de las finanzas públicas bolivianas.⁹ Sus consejos no fueron seguidos, y el gobierno recurrió, nuevamente, a la deuda externa. A pesar de su lenguaje, el republicanismo ni siquiera fue capaz de ofrecer un proyecto reformista de modernización que deberá esperar a otros protagonistas y a otra coyuntura.

Hernando Siles fue derribado por un golpe cívico-militar iniciado —para mayor ultraje del «líder de la juventud»— en las universidades. Un amplio consenso unió a los que luchaban contra un régimen autoritario y a los que combatían sus promesas de renovación. De tal consenso, efímero pero eficaz, surgiría la candidatura presidencial de Daniel Salamanca, caudillo del Partido Republicano Genuino, y la vicepresidencial de José Luis Tejada Sorzano, dirigente liberal. Las universidades llevaban, así, al poder a los más conspicuos representantes de la Bolivia tradicional. El idilio acabó rápidamente, pues la coyuntura y las decisiones a tomar frente a ella no eran nada reconfortantes. En 1930, la deuda sobrepasó los 200.000.000 de bolivianos y fue preciso suspender el pago de los empréstitos exteriores al año siguiente. Los ingresos del Estado de 1931 representaban sólo el 61% de la cifra alcanzada el año anterior.¹⁰ La unanimidad registrada en el derrocamiento de Siles se esfumó con la misma rapidez con que se deterioraba la situación económica del país. La inflación, agudizada por la emisión masiva de billetes —37.000.000 en 1931, 80.000.000 en 1932¹¹—, provocó la reaparición de protestas de los trabajadores, en especial de los funcionarios, cuyos sueldos habían sido objeto de una severa restricción. Liberales y saavedristas se alejaron de Salamanca, alarmados por la impopularidad de sus medidas. La obstrucción de salidas políticas —y no la de su piloro, como se empeña en repetir la historiografía más habitual— lanzó a Salamanca a la aventura del Chaco. En una historia como la de Bolivia, atestada de humillaciones y amputaciones territoriales, podía recuperarse la unanimidad perdida pulsando el reivindicacionismo, esta vez orientado hacia un vecino débil. Salamanca creía apostar así su carrera política a una carta segura, y nadie en el país, salvo algunos cuadros de la izquierda, se opuso a la jugada. El que iba a ser el mayor desastre militar sufrido por Bolivia comenzó, en junio de 1932, con el delirante entusiasmo de un pueblo que esperaba re-

8. CEPAL, *op. cit.*, pág. 10.

9. Ver Mendoza, F. (ed) *La misión Kemmerer en Bolivia*. La Paz, 1927.

10. Banco Central de Bolivia, *Tercera Memoria Anual*, La Paz, 1932, pág. 67; *Cuarta Memoria anual*, La Paz, 1933, pág. 59.

11. Banco Central de Bolivia, *Sexta Memoria anual*, La Paz, 1935, pág. 59.

sarcirse de sus anteriores derrotas, y con el cálculo confiado de una clase dirigente incapaz de contener la descomposición de un modelo de desarrollo manifiestamente agotado.

La postguerra inmediata: el gobierno de Tejada Sorzano (1934-1936)

Resulta ocioso indicar aquí que la seguridad de una resolución del conflicto rápida y victoriosa se vio pronto defraudada. No es intención de este artículo detallar el episodio bélico, que ha dado pie a una abundante bibliografía.¹² Lo que interesa aquí es medir el impacto de la guerra sobre los cambios que la sociedad boliviana experimentó a partir de entonces. Espero haber justificado mi afirmación inicial de que el conflicto actuó más como acelerador que como causa última de la quiebra de las instituciones liberales. Ahora bien, tanto los contemporáneos como una gran parte de los ensayistas posteriores tienden a identificar tales procesos de aceleración con los inicios reales de una crisis de régimen. Así ocurrió también en la Bolivia de 1935, cuando se vivió el desastre del Chaco como el gozne que había de separar el viejo país del que debía edificarse a partir de aquella experiencia. Aun cuando era el resultado del envejecimiento del sistema y no su causante, las dimensiones de una derrota tan inesperada propiciaron la toma de conciencia de la esterilidad de la Bolivia tradicional. Díaz Machicao resume así la mentalidad de los que lucharon en la campaña: «Los combatientes juraban destruir el pasado, arrebatarse el mando a los grupos tradicionales y buscar para la Patria vida nueva y nueva moral.»¹³ La referencia a la guerra sería, desde entonces, un paso obligado para cualquier discurso político que quisiera disponer de audiencia.

La primera ruptura con el régimen, aún muy limitada, fue el golpe que depuso al presidente Salamanca y colocó en su lugar a José Luís Tejada Sorzano, a fines de 1934. Daniel Salamanca, jefe supremo de las fuerzas armadas en su calidad de presidente de la República, se empeñó en convertir el cargo honorífico en poder efectivo, permitiéndose destituciones y nombramientos que la clase militar contemplaría como agravios.¹⁴ Lo que distingue este golpe de estado de los anteriores —y de ahí su importancia— es que no se trató de un movimiento cívico-

12. Los más accesibles son el de Qurejazu Calvo, *Masamaclay*, La Paz, 1965 y el de Zook, D.: *La conducción de la guerra del Chaco*, Buenos Aires, 1962. El profesor René Arze, director del departamento de Historia de la Universidad de San Andrés, de La Paz, lleva varios años trabajando en una historia oral del conflicto que, sin duda, nos ofrecerá una imagen inédita de la guerra, acercándonos a la comprensión de su impacto sobre el pueblo boliviano.

13. Díaz Machicao, P.: *Historia de Bolivia. Toro, Busch, Quintanilla*, La Paz, 1957, pág. 20.

14. De hecho, cuando fue apresado en Villamontes, Salamanca iba a destituir al comandante en jefe del ejército del Chaco. La misma declaración de guerra fue mal vista por el Estado Mayor, que advirtió al presidente de la incapacidad del ejército boliviano para abastecer un frente tan alejado de los centros de población. Salamanca asumió toda la responsabilidad, aunque luego culpó a la innegable torpeza del alto mando de los desastres.

militar, sino de un acto exclusivamente castrense contra el poder civil. Y no debe llamar a engaño la colocación de Tejada en el puesto de Salamanca: a diferencia de los golpes previos, la alternativa de un poder militar permanente se estaba gestando ya en el Estado Mayor, como los hechos encargarían de demostrar.

La unanimidad que en principio se creó en torno al nuevo presidente se quebró en cuanto el conflicto militar quedó resuelto. Papel importante fue el que correspondió a Bautista Saavedra en tal coyuntura. En efecto, el viejo caudillo confiaba en ser la única salida posible a la situación en que había dejado el país la coalición de salamanquistas y liberales. Fallecido Salamanca al mes del cese de las hostilidades, demasiado vivo el recuerdo de la dictadura en que había desembocado el silismo, Saavedra creía contar con el suficiente prestigio entre las capas populares urbanas presentándose como el pionero en la legislación social, al tiempo que ofrecía, de cara a los sectores más moderados, la imagen tranquilizadora de un puente entre la vieja y la nueva Bolivia que él mismo pretendía personificar. En los meses que siguieron a la paz, Saavedra rompió el pacto establecido con Tejada y separó a los dos ministros republicano-socialistas del gobierno. Resulta lógico suponer que Saavedra iniciaría entonces sus contactos con sectores nacionalistas y militares, ofreciendo la influencia que el Partido Republicano Socialista tenía aún en la clase trabajadora para provocar la revolución. No debe suponerse que Saavedra pensara entonces en convertir el ejército en rama permanente del gobierno, y mucho menos en sustituto de los partidos civiles. Para él se trataba, sencillamente, de un instrumento cuya función debía ser la de liquidar la permanencia del liberalismo en el gobierno, recoger la aspiración nacional de romper con una política de viejo cuño cuyos exponentes eran genuinos y liberales y abrir el camino al reformismo cerrado por Salamanca. Era sensato opinar que ni la izquierda del silismo ni los militares estaban en condiciones de ofrecer una alternativa como la que representaba el P.R.S. Resulta extraño, sin embargo, que Saavedra no reflexionara sobre el papel que el ejército estaba desempeñando en la crisis de los estados liberales en naciones vecinas como Argentina o Brasil, sin haberse dado en estos casos conflictos internacionales que hubieran depositado un protagonismo especial en las fuerzas armadas. Saavedra, que no infravaloraba en absoluto el golpe dado por el desastre militar al antiguo régimen, no estuvo igualmente acertado a la hora de medir las intenciones de unos militares incitados a la acción política, y que podían dejar de verse a sí mismos como una excepción transitoria entre gobiernos civiles «normalizados».

Desde muy pronto, los órganos de prensa vinculados a los partidos tradicionales —y especialmente *El Diario*, prácticamente el órgano del liberalismo— llamaron a la constitución de un gobierno de unidad nacional y al respecto a la prórroga del mandato de Tejada Sorzano, para conjurar el peligro de una intervención militar. Muy poco después de firmarse el armisticio, se dice en este órgano de prensa: «*Hace ya muchos días que venimos escuchando disertaciones acerca del imperio de la constitución, y las escuchamos de labios de las personas de dos facciones políticas, una de las cuales hizo la guerra como la hizo y la otra propone en el conflicto actual una junta de gobierno o gobierno de facto, fuera de la constitución. Alejados de intereses partidarios, creimos nosotros que alguna vez*

después del inmenso sacrificio y dolor de la guerra el país habría de mostrarse cuerdo y dueño de sus destinos (...) Son inútiles nuestros esfuerzos para levantarnos a la altura que nos llamaba la gravedad de la hora (...) Nadie ve más en el horizonte que la dictadura militar. No podrá ver otra cosa, puesto que si los civiles son incapaces para ordenar sus ideas, el Ejército vendrá a imponer por lo menos orden. Y no es que auspiciemos la solución, sino que simplemente la vemos venir.»¹⁵ En efecto, los constantes esfuerzos de Tejada Sorzano para unir en torno a su persona a los partidos tradicionales resultaron inútiles, por la negativa de los republicano-genuinos y los saavedristas. Los primeros porque exigían el respeto a unas elecciones celebradas en plena guerra; los segundos, porque esperaban beneficiarse de la quiebra del edificio conservador. El peligro denunciado por *El Diario* parecía respirarse en el ambiente, como lo demuestran las repetidas declaraciones de Tejada Sorzano acerca del carácter no intervencionista del ejército.¹⁶ En los primeros meses de 1936, el embajador de los Estados Unidos enviaba significativos mensajes a la Secretaría de Estado dando cuenta de la inminencia del golpe. El 6 de febrero afirmaba que «*El Estado Mayor del Ejército se ha negado a abandonar las restricciones de guerra como la censura de prensa y correo (...) Hay crecientes rumores de que el coronel Toro no esperará a la elección de la Asamblea Nacional que debe ser votada en mayo para restaurar un gobierno constitucional en Bolivia, sino que tomará el gobierno en cuanto esté resuelto el problema de los prisioneros.*»¹⁷ El 28 de febrero, la embajada, tras apuntar la violenta campaña desatada por los saavedristas contra la continuación del estado de sitio, insistía en que muy pocos creían que las elecciones fueran a llevarse a cabo, señalando que «*es un sentimiento generalizado que el coronel Toro se hará cargo del gobierno antes del día señalado para las elecciones. De hecho, muchas personas se sorprendieron, en La Paz, que le fuera permitido al presidente Tejada Sorzano regresar a La Paz desde Sorata, donde el Presidente había pasado los festivales de carnaval.*»¹⁸ El 6 de marzo, comentando una rueda de prensa ofrecida por Tejada Sorzano, en la que éste había sostenido la imposibilidad de suspender el estado de sitio a causa de la agitación izquierdista, el diplomático escribía a Washington lo siguiente: «*Las actividades de los comunistas son un factor, pero incuestionablemente el menos importante entre las causas del actual desorden. La auténtica causa de la confusa situación es la debilidad y vacilación de la actual administración para encarar los hercúleos (sic) problemas de la postguerra y su fracaso a la hora de solucionar cualquiera de ellos (...) La administración es, pues, impopular entre los trabajadores, las más importantes industrias mineras y los comerciantes, y su impopularidad ha creci-*

15. *El Diario*, 3 de agosto de 1935.

16. Por ejemplo, las que se recogen en *El Diario* del 10 de julio de 1935, cuando el presidente expuso a los jefes militares los rumores sobre un golpe de Estado, que éstos negaron efusivamente.

17. DEPARTMENT OF STATE: *Foreign Relations of the United States, 1936*, Vol. V, págs. 220-221. Washington, 1957.

18. *Loc. cit.*, pág. 222.

do por la continuidad del oneroso estado de sitio.»¹⁹ En mayo de 1936, poco antes de que se produjera el golpe de estado. Tomás Manuel Elío, dirigente del Partido Liberal, explica a la prensa las razones de abstención de su fuerza política, que pueden resumirse en la seguridad de que el ejército, apoyado por determinadas organizaciones —singularmente el recién creado Partido Socialista— ocuparía el poder. Los intentos de convencer a socialistas y saavedristas para llegar a un acuerdo que evitara el golpe habían fracasado, y ello obliga a los liberales a situarse: «en el puesto de espectadores de la nueva política (...) en visperas del experimento colectivista, en que Bolivia hará el papel de conejito de indias, en el laboratorio de la sociología americana.»²⁰

Desde el fin de la guerra se va identificando el aislamiento del gobierno Tejada Sorzano con una alternativa militar, ya se contemplara ésta como opción permanente, ya se observara como una simple medida transitoria, destinada a la realización de rectificaciones similares a las llevadas a cabo en 1930 y 1934. La desorientación de los partidos tradicionales sólo es comparable a su desprestigio. Ambos aspectos eran de especial relevancia en el Partido Genuino, que al haber querido monopolizar una victoria había cargado con la adjudicación del desastre bélico. Sin embargo, el mismo Partido Liberal, que había conseguido el milagro de regresar al Palacio Quemado y de obtener mayoría parlamentaria tras dos golpes militares sucesivos, no había podido exculparse totalmente de las responsabilidades del conflicto porque representaba, como ningún otro, la imagen de la Bolivia clásica. Tratándose del grupo que había gobernado durante mayor número de años el país, cuya expansión habíase mostrado como una farsa, empuñaba las riendas del poder en el delicado proceso económico que acompañó y siguió a la guerra, cuando a la depresión se añadieron los efectos de la política inflacionaria realizada durante el conflicto. Las indecisiones de los liberales en el periodo 1935-1936, buscando desesperadamente la alianza con saavedristas primero y con genuinos después, para acabar predicando la abstención, corresponden a una profunda crisis de confianza que se adueñó de los dos principales grupos defensores de un regreso a las fórmulas del antiguo régimen. Tan sólo el saavedrismo esquivó tal desajuste con su base social, y ello sólo momentáneamente, gracias a la astuta conversión a tesis socializantes que contactaban con la difusa aspiración al cambio experimentada desde inicios de la década. Con todo, incluso el saavedrismo fue incapaz de mantener su indiscutido ascendiente sobre las capas populares urbanas, por diversos factores entre los que pueden contarse el cambio en la composición del movimiento obrero, la aparición de fuerzas políticas realmente nuevas y la misma muerte del caudillo. La rapidez con que se desmoronan los dos partidos más estrechamente identificados con el sistema tradicional es un producto específico de la guerra del Chaco que, sin crear tendencias radicalmente nuevas, sí matiza los ritmos de envejecimiento y potencialidad de los movimientos sociales y sus expresiones políticas. El informe del embaja-

19. *Loc. cit.*, pág. 223.

20. *La Razón*, 3 de mayo, 1936.

dor norteamericano, rechazando las obsesivas acusaciones a la agitación izquierdista resulta especialmente revelador cuando admite la existencia de un descontento generalizado, vertical en la sociedad boliviana. La inadaptación de los liberales, la reclusión genuina y la conversión de los saavedristas son las tres fachadas de un mismo edificio condenado al derribo. La cita de los industriales mineros como opositores nos sitúa ante dos reflexiones de interés: por un lado, la pérdida de la base social natural del liberalismo; por otro, la existencia de una corriente favorable a la «rectificación» en el seno mismo de la oligarquía. Ello acentúa la ambigüedad del «socialismo militar» de Toro y Busch, pero también precisamente en su ambigüedad reside gran parte de las explicaciones que pueden darse a sus éxitos, por efímeros que fuesen. Lo que se nos presenta en mayo de 1936 es, por tanto: la completa descomposición de los canales de legitimidad política de la Bolivia de pre-guerra, neutralizando cualquier intento de conducir la protesta social a través de las viejas organizaciones, incluyendo el Partido Republicano Socialista; la inmadurez de los grupos constituidos a partir de la derrota, sean explícitamente políticos o de carácter corporativo; la disposición de una parte importante de la joven oficialidad a desplazar a las capas dirigentes de la Bolivia tradicional, considerando que el Ejército es la única institución situada por encima de los intereses partidistas capaz de llevar adelante tal transformación.²¹

Estos tres factores políticos se movían en el marco de la crisis iniciada en los años veinte y cuya más penosa manifestación para las capas trabajadoras era la inflación. Por motivos diversos, entre los que se citan la disminución de las inversiones, la salida del capital para la adquisición de armamento y el mantenimiento de un tipo de cambio artificialmente beneficioso para el peso boliviano,²² el fenómeno inflacionario se mantuvo a un ritmo de crecimiento moderado en el periodo de guerra. A partir de 1935-36 se operaría un incremento en el índice de precios que ya no podía justificarse por las penalidades de aquélla. Entre las causas de este crecimiento se encuentra la propia actividad emisora del Banco Central. Los 222'5 millones de bolivianos en depósito y circulación de 1934 pasaron a ser 377'7 millones al año siguiente y 442'9 en 1936.²³ Las necesidades fiscales se cubrían con bonos nacionales y departamentales adquiridos por el Banco emisor, que en 1936 expresaba sus temores con esta advertencia: « (...) *las inversiones mobiliarias (...) constituyen siempre y en todas partes un grave malestar, que tarde o temprano, y más antes que después, afectan a la moneda nacional, dando lugar a su desvalorización (...)* Si el Estado cubre los déficits del

21. La posición del ejército habría de completarse con otras reflexiones. Por ejemplo, la incidencia que tuvo en su decisión de actuar políticamente el peligro de un juicio de responsabilidades que sacara a la luz su manifiesta incompetencia. No se olvide tampoco que no hablamos exclusivamente del ejército profesional, sino también de aquéllos cuya experiencia en los campos de batalla del Chaco les llevará a militar en organizaciones de ex-combatientes, con lo que el contacto entre ejército y sociedad civil se hace más estrecho.

22. CEPAL, *op. cit.*, págs. 59 y ss.

23. Banco Central de Bolivia, *Octava memoria anual*, 1937, págs. 49-50.

*presupuesto ordinario mediante empréstitos colocados ante el Instituto emisor, quiere decir que el país está en el camino de la bancarrota monetaria.»*²⁴ Las relaciones comerciales con el exterior mejoraron tras la guerra del Chaco. Las exportaciones ascendieron a un valor total de 150.000.000 bolivianos, y las importaciones a 80.000.000. El principal recurso para mantener la balanza comercial favorable continuada siendo el estaño, que proporcionaba el 78% del valor de las exportaciones, el 93% de todas las rentas obtenidas por la salida de productos bolivianos y el 36'8% del total de ingresos presupuestados para 1935. Sin embargo, el porcentaje de renta sobre el valor de exportación era del 11%. Aun tratándose de un presupuesto con superávit, tal apreciación debe matizarse con los casi 400.000.000 de bolivianos en deuda interna, procedentes en su mayoría de los bonos de emergencia de 1933.²⁵ En la inflación intervenían tanto los factores estrictamente monetarios —emisión, déficit— como los correspondientes a la recuperación económica. La conjunción del crecimiento de la demanda de mano de obra y de los precios condujo, respectivamente, a un marco más favorable para la organización obrera y a una exigencia más enérgica del incremento salarial y la contención de la curva inflacionaria. Durante los primeros meses de 1935 empezaron a reorganizarse las antiguas Federaciones Obreras de Trabajo, que para 1936 habían alcanzado el vigor suficiente como para coordinar sus esfuerzos, orientados a la obtención de plataformas reivindicativas que no sólo contemplaban los aspectos de inflación y salarios, sino también los referidos a las libertades políticas y sindicales.²⁶ Entre los sindicatos que se reorganizaron tras la guerra del Chaco destacó el de gráficos, cuyo dirigente Waldo Álvarez acabó siendo una de las más prestigiosas figuras del sindicalismo urbano en Bolivia. El 10 de mayo de 1936, tras haber presentado un pliego de peticiones al gobierno, los gráficos iniciaron la huelga general, a la que se sumaron inmediatamente la Federación Obrera de Trabajo y la Federación Obrera Local.²⁷ Según el embajador norteamericano, «se llegó a un paro total en las actividades industriales y comerciales en La Paz (...) La Federación de Estudiantes de La Paz anunció que se uniría a los trabajadores si la huelga no finalizaba el lunes. El Presidente discutió la situación en una reunión de notables (...) y decretó la movilización de todos los trabajadores, sometiéndolos a las leyes y deberes militares. Los trabajadores hicieron caso omiso del decreto y pronto quedó claro que no había nada que hacer».²⁸ El 17 de mayo, tras haberse negado a utilizar el ejército contra los huelguistas, el Jefe del Estado Mayor, Teniente Coronel Germán Busch, obtenía la renuncia del presidente Tejada, llamando a David Toro para que se hiciera cargo de la Junta de Gobierno.

24. *Loc. cit.*, págs. 48-49.

25. Banco Central de Bolivia, *Séptima memoria anual*, págs. 72-75.

26. Según *El Diario* del 19 de abril de 1936, la F.O.T. de La Paz presentó un pliego de reivindicaciones que incluía la supresión del estado de sitio, garantía de libertades de reunión, asociación y prensa, amnistía, derogación de la ley reglamentadora de la huelga, etc.

27. Álvarez, W.: *Los gráficos en la historia de Bolivia*. La Paz, 1977, págs. 90 y ss.

28. Department of State, *op. cit.*, págs. 229-230.

Nuevas fuerzas políticas, sindicales y corporativas

Antes del estallido de la guerra se habían creado en el país sindicatos obreros, pequeños núcleos socialistas y organizaciones estudiantiles claramente influidos por las corrientes de pensamiento que se extendían en América Latina.²⁹ Sin embargo, hubo que esperar al comienzo del conflicto y, sobre todo, a las condiciones en que finalizó, para que se creara un clima propicio a la superación de los partidos tradicionales. La quiebra de las viejas instituciones no fue inmediata, y aún después de las experiencias de reformismo militar se volvería a aquéllas. De la misma forma, la maduración de las nuevas fuerzas opositoras, a pesar de estímulo ofrecido por la postguerra, no fue lo suficientemente rápido como para sustituir definitivamente a los grupos tradicionales, prescindiendo de la tutela del ejército.

El deseo de superar los esquemas sociales de la «vieja Bolivia» dio paso a lo que algún autor ha denominado «marea socializante». En efecto, pocos de los nuevos grupos se resisten a la tentación de utilizar tal adjetivo: incluso los facistas de Falange «Socialista» Boliviana o los partidos oficialistas protegidos sucesivamente por Toro y Busch consideran imprescindible su utilización. Sin embargo, los núcleos vinculados a las corrientes mayoritarias del socialismo eran diminutos. El primero de ellos, que en 1934 tomó el nombre de Partido Obrero Revolucionario —P.O.R.— acogió en su seno, en el exilio, a algunos intelectuales de izquierda, más o menos influidos por el marxismo, que veían en la guerra un conflicto interimperialista —y, más concretamente, un conflicto entre la Standard Oil y la Royal Dutch Shell—. Su funcionamiento como grupo de agitación en el exterior le restó posibilidades en el magma de organizaciones «socialistas» que emergió del caos de postguerra. El P.O.R. contaba con una de las principales figuras de la izquierda boliviana, Tristán Marof, autor de textos clásicos como *La justicia del Inca* y *La tragedia del Altiplano*. Junto a él se encontraba un joven valor, José Aguirre Gainsborg, que tras una breve militancia en el Partido Comunista boliviano pasó a simpatizar, durante su exilio en Chile, con las posiciones troskistas. Al celebrarse la II Conferencia del P.O.R., que debía haber servido para impulsar el partido en el interior, el enfrentamiento entre las dos concepciones del socialismo y del carácter del partido defendidas por Madof y Aguirre llevaron a que el primero se apartara del P.O.R., constituyendo un exiguo Partido Socialista Obrero que se diluyó en los años cuarenta. El P.O.R., convertido ya en organización inspirada por el trotskismo —aun cuando de momento no se afilió a la IV Internacional—, perdió en un accidente estúpido a la más valiosa de sus figuras, el mismo año 1938, y nunca obtuvo arraigo en la clase obrera del país.³⁰ El espacio político

29. El mejor manual de la historia del movimiento obrero en Bolivia, a pesar de algunas objeciones a hacer sobre el método expositivo y sobre la orientación ideológica con que llega a «encauzarse» la realidad, es el de Guillermo Lora: *Historia del movimiento obrero boliviano*, La Paz, 1968-1980, del que se han publicado cuatro volúmenes.

30. Sobre Aguirre Gainsborg, ver Lora, G.: *José Aguirre Gainsborg, fundador del POR*, La Paz, 1960.

marxista sólo quedaría cubierto más adelante, cuando diversos grupos sociales y del exterior se unificaron en el Partido de la Izquierda Revolucionaria, en 1940, dirigido por José Antonio Arze, que logró rebasar la implantación en el marco minero para llegar a influir en las capas populares urbanas e incluso algunas comunidades indígenas.³¹

El «socialismo» hegemónico en la inmediata postguerra no fue el de inspiración marxista, aun cuando ésta pudiera estar presente en algunos planteamientos individuales. De hecho, el grupo que llegaría a cobrar más importancia procedía del Partido Nacionalista de Siles. Este se escindió a fines de 1935, dando lugar, tras complejos contactos con los diversos núcleos nacionalistas de izquierda, al Partido Socialista. Aunque la figura principal del P.S. era Enrique Baldivieso, se vería pronto rebasado por los colaboradores del diario *La Calle*, que en junio de 1936 comenzaría una andadura de diez años, inicialmente como «órgano del partido socialista» y más adelante como el más autorizado portavoz del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Entre sus redactores figuraban Carlos Montenegro, Augusto Céspedes, Armando Arce, José Cuadros Quiroga y Nazario Pardo Valle. La opinión dominante del «socialismo» de este periodo estuvo orientada por este sector poco numeroso pero muy influyente al que se unirían después destacadas figuras de la Convención de 1938, como Víctor Paz Estenssoro o Walter Guevara. En sus primeros años, este grupo profundamente ecléctico no aspiró a convertirse en una organización de masas, sino a crear una élite que influyera sobre los oficiales regeneracionistas del Chaco, sensibles a un programa fundamentalmente nacionalista, cuyo «socialismo» se limitaba a la eliminación de la oligarquía y su sustitución por una burguesía nacional. A corto plazo, tal estrategia resultó eficaz, y sólo habría de rectificarse a la muerte de Busch, cuando se crea el M.N.R., y sobre todo tras la caída de Villarroel, cuando se opta por la insurrección popular y por un programa capaz de provocarla.³²

Junto a los partidos propiamente dichos, la postguerra asistió al nacimiento de organizaciones de carácter sindical algunas, corporativo otras, que tendrían notables índices de afiliación y una gran capacidad de presión sobre el ejecutivo. Fruto directo de la guerra fue, por ejemplo, la Legión de Ex-Combatientes, a la que se sumarían grupos específicos como la Asociación de Ex-Prisioneros y la Asociación Mutilados e Inválidos de Guerra. Aunque todos estos organismos negaran vinculación con partido político alguno, sus simpatías se dirigían hacia aquellos oficiales jóvenes, sin relación con el antiguo régimen, que confiaban en la renovación de la vida política boliviana prescindiendo de los viejos partidos. El apoyo

31. El programa del P.I.R. puede consultarse en Cornejo, A.: *Programas políticos de Bolivia*, Cochabamba, 1949, págs. 232 y ss.

32. Sobre el M.N.R. en su etapa previa a la revolución del 52 existen pocos estudios. Los que merecen destacarse son el de Peñaloza, L.: *Historia del Movimiento Nacionalista Revolucionario*, en curso de publicación desde 1984, con tres volúmenes en el mercado. Como en todo lo que hace referencia a este período, debe consultarse también la tesis doctoral de Klein, H., publicada bajo el título de *Parties and Political Change in Bolivia, 1880-1952*. Cambridge, 1971.

era mayor, lógicamente, cuando se trataba de alguno de los escasos héroes de guerra bolivianos, como Germán Busch, y cuando la atención gubernamental a las exigencias corporativas de los excombatientes ofrecía empleo o pensiones a los afiliados. También fruto de la guerra fue la organización de RADEPA —Razón de Patria—, formada por oficiales de rango inferior a Mayor en los campos de prisioneros paraguayos. Esta logia militar, dotada de un programa nacionalista próximo al que podían presentar los «socialistas» de *La Calle*, tendría un papel muy poco claro en este periodo. Su fundador llegaría al ministerio de gobierno con Busch, pero no parece que antes del golpe de Villarroel dispusiera de una trama lo suficientemente consolidada como para imponer sus propuestas a sus compañeros de armas en el poder.³³ Citemos, para acabar esta rápida enumeración de las fuerzas emergentes del Chaco, la unificación de los sindicatos en la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia, en Noviembre de 1936, que dos años más tarde se afiliaría a la Confederación de Trabajadores de América Latina,³⁴ y la consolidación de la Federación Universitaria Boliviana —F.U.B.—, cuya IV Convención, celebrada en 1938, la convertiría en una de las principales plataformas de transformación de la izquierda marxista.³⁵

Los gobiernos David Toro (1936-1937) y de Germán Busch (1937-1939)

El golpe de Estado que depuso al presidente Tejada dio lugar a la formación de una Junta Mixta de Gobierno constituida por cuatro militares, dos saavedristas y dos socialistas. La designación del coronel Toro como jefe de la misma resultó una sorpresa sólo para los que se encontraban al margen de la conspiración o, sencillamente, mal informados. Waldo Álvarez indica que el movimiento huelguístico realizado sobre los días inmediatos al golpe no tuvo nada que ver con éste,³⁶ y lo cierto es que tanto el movimiento obrero como los estudiantes permanecieron en huelga hasta llegar a un acuerdo con la junta sobre el aumento de salarios y la promesa de que un representante de los trabajadores formaría parte del gobierno. Es posible que el descontento de los sectores más izquierdistas se deviera a la misma figura de David Toro, a quien se veía vinculado demasiado al antiguo régimen y, sobre todo, a la oficialidad responsable de la derrota.³⁷ Saavedra, por su lado, no ocultaba la antipatía personal que sentía por Toro, senti-

33. Véase el libro de Barrero, F.: *Radepa y la revolución nacional*, La Paz, 1976, que incluye en apéndice los documentos de la logia.

34. Barcelli, .: *Medio siglo de luchas sindicales revolucionarias en Bolivia*. La Paz, 1956, págs. 144-146.

35. Su programa integro se publica en el libro de Cornejo ya citado, págs. 297 y ss.

36. En entrevista celebrada en La Paz, en agosto de 1985, Eduardo Arze Quiroga me señalaba la frialdad con que Toro fue recibido en La Paz tras el golpe de Estado. Y el mismo Álvarez, en *Los gráficos*, indica la absoluta desvinculación de ambos sucesos.

37. David Toro había pertenecido al gobierno de Hernando Siles y en la campaña del Chaco tuvo una actuación desastrosa, siendo el responsable de la célebre retirada de Picuiba.

miento que fue siempre correspondido. Evidentemente, el disgusto de Saavedra podía deberse a la personalidad poco manejable de Toro cuando, como hemos visto, el viejo caudillo esperaba convertirse en el puente entre el nuevo orden de cosas y la tradición republicana progresista. Al aislamiento de Toro se unía su propia inseguridad sobre la suerte del movimiento. Como él mismo señalaría más tarde, «*me opuse terminantemente al golpe de mayo, como lo demuestran mis conferencias telegráficas con el Teniente Coronel Busch (...) y en las que consideraba que por patriotismo y por fidelidad debía dejarse concluir su periodo al presidente Tejada Sorzano (...) ya que faltan apenas dos meses y medio para la terminación de ese mandato*».³⁸ El embajador norteamericano, por su parte, escribía: «*La huelga general creó una situación crítica, que fue utilizada por izquierdistas, en especial los saavedristas, para levantar sus ambiciones, de modo que el ejército tuvo que actuar para proteger su situación dominante*».³⁹ Las dudas de Toro no se debían a su negativa absoluta a hacerse con el poder, sino a la consideración de que el golpe era prematuro. Lo que provocó el adelantamiento de los hechos fue la huelga general, desvinculada de las corrientes más próximas a soluciones militares. El Estado Mayor se sumó, pues, a la revolución para controlar su desarrollo. Saavedristas y baldivienistas confiaban en que el golpe les ofrecería un terreno adecuado para hacerse con el poder, ofreciendo una ideología y bases populares de las que el ejército carecía. El que se encontraran en un error no excluye que esa fuera la alternativa más visible en mayo de 1936. La discrepancia no se debía, por tanto, sólo al ritmo de los hechos, sino a su propio carácter. La ambigüedad del golpe se mantendría a lo largo del trienio, con fuertes bandazos en favor y en contra del orden tradicional, que no se deben a la personalidad de los dos máximos representantes del «socialismo militar», sino al delicado equilibrio que se estableció entre la vieja organización social boliviana y la demandas de cambio surgidas en la postguerra. El trienio de reformismo militar ofrece, como veremos, no sucesiva, sino internamente la imagen de un asuperación radical del antiguo régimen y de la última carta jugada por éste para salvar los elementos sustanciales a través de variaciones en la superficie.

A su regreso a La Paz para hacerse cargo de la presidencia de la Junta Mixta de gobierno, Toro declaró que «*el nuevo gobierno hará una política de justicia y de reconstrucción nacional, implantando un franco socialismo de Estado, que constituye la intención firme del ejército*».⁴⁰ A saavedristas y baldiviesistas Toro sumó, como ministro del recién creado ministerio de Trabajo, al conocido dirigente sindical Waldo Álvarez. Tal era la reacción a la presiones del movimiento obrero expresadas en las primeras jornadas del cambio. Sin embargo, lo que el gobierno entendía por «socialismo» se mostró claramente en las declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Baldivieso, que expresaban la línea de pensa-

38. Citado por Antezana, *op. cit.*, pág. 99

39. Department of State, *op. cit.*, pág. 232.

40. *El Diario*, 21 mayo, 1936.

miento del mismo Toro, al distinguir entre el capitalismo egoísta que había gobernado Bolivia hasta entonces y el «*capital productivo y fecundo*» que el nuevo régimen se esforzaría en atraer. Las ideas expresadas por el líder del Partido Socialista habían de ser bien acogidas en los sectores militares chaqueños, al permitirles proclamar las ideas de justicia social sin considerar necesario el enfrentamiento entre bolivianos de clases diferentes. Era el conjunto de la nación la que se hallaba asediada por el atraso, y su modernización no exigía más que el hallazgo de una clase media emprendedora tutelada por un Estado que no se subordinara a los intereses de una estrecha oligarquía, del llamado «superestado minero».⁴¹ A pesar de las diferencias que debían existir entre Baldivieso y Álvarez, Toro fue capaz no sólo de mantener a ambos en la Junta, sino de tranquilizar a los grupos conservadores, cuyos órganos de expresión contemplaron el golpe resignadamente. Si los trabajadores veían su participación en el gobierno como una conquista histórica, y los socialistas de Baldivieso como ratificación de la alianza entre una élite de intelectuales y las fuerzas armadas, los dirigentes de la minería podían contemplar con cierta satisfacción el recambio de partidos tradicionales en los que ya no confiaba, esperando que la presencia del ejército en la cabeza del proceso evitaría que los sucesores del viejo orden fueran las organizaciones revolucionarias que se estaban creando en aquellos mismos años.⁴²

Con todo, la visión del expediente militar como un episodio de rápida transición se vio pronto defraudada. Los intentos saavedristas de ganarse a la clase media del país denunciando el izquierdismo de Baldivieso y Álvarez condujeron a la disolución de la Junta Mixta por parte de Busch y al establecimiento de un poder exclusivamente militar, en el que algunos civiles participaban a título individual. Mientras el Partido Socialista quedaba prácticamente disuelto, el P.R.S. pasó a la oposición, dedicando sus esfuerzos a llegar a una entente con el resto de los partidos tradicionales. Busch venía así a desengañar a los que veían el ejército como un simple instrumento para aplicar un programa de partido. Los únicos que escaparon al desengaño fueron los que nunca se habían engañado, es decir, los «socialistas» que entendieron desde el principio la revolución como una operación conjunta de militares y civiles.

El viraje provocado por Busch fue seguido inmediatamente por fórmulas de superación del sistema tradicional que alarmaron a las clases dirigentes. El 4 de julio se fundaba la Asociación Nacional Permanente de Organizaciones Sindicales —ANPOS—, constituida por representantes de los sindicatos legales. La creación de este organismo no tendría importancia mayor de no haberse acompañado de un decreto de sindicalización obligatoria y declaraciones sobre la caducidad de las formas de representación del régimen liberal.⁴³ A fines de julio, Toro de-

41. Discurso de Baldivieso en la *La Razón*, 24 mayo, 1936.

42. Dos de los dirigentes de la poderosa Asociación de Industriales Mineros de Bolivia, Aramayo y Hochschild, que había padecido la prepotencia de Patiño, se colocaron junto a Toro para resultar beneficiadas en los cupos de exportación de estaño.

43. El decreto de sindicalización obligatoria fue aprobado el 19 de agosto de 1936. Establecía la necesidad de presentar el carnet sindical para tener derecho a la carta de ciudadanía y en su artículo

claraba a *El Diario* que «El ambiente se caracteriza por la ausencia de grandes agrupaciones políticas sanas (...) y por la existencia de pequeñas agrupaciones que pretenden dominar el Estado. La vieja política no ha educado a las masas (...). El parlamento (...) debe funcionar, en adelante, bajo la base de una doble representación (...), es decir, de una representación de los partidos, mediante el voto de la ciudadanía, y de una representación de los gremios, mediante el voto social de los grupos. (El gobierno) quiere, sencillamente, aprovechar esta fuerza (los sindicatos), encauzala, dentro de ciertos límites, someterla al control del Estado, hacer de ella un instrumento de disciplina y educación de las masas (...).»⁴⁴ Esta tendencia a prescindir de los partidos se manifestaría en actos aparentemente menores, como la encomendación de las prefecturas a elementos militares «como una prenda de garantía en momentos en que, después de una evolución política trascendental, el país requería olvidar sus rencillas y unificar su acción hacia un solo fin» o la creación de alcaldías rentadas, sustituyendo a los órganos de poder municipal elegidos por la población.⁴⁵

En los aspectos económicos no había, sin embargo, motivo para la alarma de la derecha. Mientras se indica que el problema del indio es económico,⁴⁶ los «asuntos indígenas» siguen formando parte del ministerio de Educación. Las referencias específicas a la agricultura se recrean en minucias de modernización técnica —como la creación de una Estación Zootécnica en el Altiplano— sin mención alguna a cambios en la estructura de la propiedad, salvo en lo que hace referencia a terrenos fiscales por colonizar.⁴⁷ El flamante Ministerio de Minas y Petróleo, creado por la revolución, sólo enfrenta a unos magnates contra otros, al distribuir el cupo de exportación. Se incrementa ligeramente la entrega de divisas y los impuestos sobre las concesiones mineras.⁴⁸ La Ley Orgánica de Petróleos, aprobada en octubre, se limita a establecer un control más rígido sobre las concesiones y los plazos de explotación. Antes de la célebre exportación de la Standard, sólo se planteaba un reajuste administrativo tendente a que los inversionistas extranjeros hallaran mejores condiciones para la colocación de capital en el sector.⁴⁹ Medidas en contra de la especulación, como la creación de Almacenes Públicos, ya había empezado a ser adoptadas por Tejada Sorzano y, desde luego, no son lo que caracteriza una «política de verdadera tendencia socialista», como lo hace Toro.⁵⁰ Sin reforma agraria ni nacionalización de las minas, el re-

3º señalaba que «Los sindicatos estarán bajo tuición y control permanente del Gobierno Socialista, y la organización sindical será incorporada al mecanismo del Estado como base para la constitución fundamental de los Poderes Públicos». (*Anuario Administrativo de Bolivia, 1936*, págs. 1641-1644).

44. *El Diario*, 28 julio, 1936.

45. *Bajo el régimen militar socialista ¿hay labor gubernativa?* La Paz, 1937, págs. 6-7.

46. *Loc. cit.*, pág. 45.

47. Toro, D.: *Informe presentado por el Sr. Coronel Presidente de la Junta Militar Socialista de Gobierno al Ejército nacional*. La Paz, 1937, págs. 81-86.

48. *Loc. cit.*, pág. 22; *Bajo el régimen...*, pág. 79.

49. Toro, D.: *op. cit.*, pág. 51.

50. Toro, D.: *op. cit.*, pág. 51.

formismo militar era una falacia que no podía ocultarse bajo el acopio de medidas burocráticas. La eliminación de Waldo Álvarez del gobierno, a fines de 1936, es más que una anécdota en el marco expuesto.

Sin embargo, David Toro no estaba dispuesto a una simple vuelta atrás. En su mensaje a la Fuerzas Armadas de enero de 1937, recordaba que «una serie de partidos políticos tuvieron en sus manos la suerte de Bolivia (...) Pero extraños a la entraña misma de la nacionalidad, todos cayeron al empuje popular de ídolos que falsifican su voluntad (...) En lugar de formar partidos de acomodo entre sus dirigentes, hay que fundirlos en el alma del pueblo (...) El ejército vive esperando el advenimiento de nuevas organizaciones partidistas, libres de mancha original, para cederles el gobierno del país.»⁵¹ Sin embargo, el mismo Toro retrataba la vuelta a la institucionalización del país en el marco del poder civil. La fecha de elecciones para una Asamblea Constituyente no se decidía, los grupos tradicionales hallaban trabas para reunirse que se añadían a la propia dificultad histórica que suponía recuperar su clientela dispersa y decepcionada. La ambigüedad del presidente acabó volviéndose contra él, cuando halló a todos los sectores políticos cada vez más alejados de la Junta. Los hombres de *La Calle* perdieron su entusiasmo inicial por un hombre que no avanzaba ni siquiera en los cambios de orden institucional. Los partidos tradicionales habían sufrido el exilio de sus líderes o la clausura de órganos de prensa tan prestigiosos como *El Diario*. La «vuelta a la normalidad» exigida por éstos parecía esfumarse de las intenciones presidenciales, sin que el caos financiero y la inflación se solucionaran.⁵² Tras el fracaso sufrido en la organización de un «Partido Socialista de Estado» constituido por funcionarios públicos,⁵³ Toro intentó un golpe de efecto que alejara el peligro de su relevo. El 13 de marzo de 1927, pocos días después de que Busch hubiera visto rechazada su provocativa dimisión como Jefe del Estado Mayor, David Toro decreta la nacionalización de la Standard Oil, que pasaba a formar parte de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, fundados a fines del año anterior. Con ello pulsaba uno de los aspectos más sensibles de opinión popular, para la que era un secreto a voces el fraude realizado por la compañía en la etapa republicana y, sobre todo, durante la guerra del Chaco, declarada, según proclamaban nacionalistas y marxistas, en interés exclusivo de la Standard.⁵⁴ El ges-

51. *Loc. cit.*, pág. 51.

52. Para los perjuicios de la política financiera de Toro, véase Mendoza López, V.: *Las finanzas de Bolivia y la estrategia capitalista*, La Paz, 1940.

53. Tal es la imagen que ofrecen las noticias de prensa sobre la constitución del P.S.E. en varias localidades. No sin cierta malicia, se insiste en el hecho de que prefectos o alcaldes sean los dirigentes departamentales o locales del Partido. Por ejemplo, *El Diario* del 19 de mayo de 1937, o el del 21 del mismo mes, haciendo referencia a la constitución del Partido en Sucre y Cochabamba respectivamente.

54. Sobre el proceso de instalación y nacionalización del petróleo disponemos de la excelente síntesis de Klein, H.: «American Oil Companies in Latin America. The Bolivian Experience» *Inter-American Economic Affairs*, Vol. XVIII, nº 2, 1964, págs. 47-72. Tejada Sorzano había iniciado ya una investigación sobre las responsabilidades de la empresa en el conflicto, y desde el final de la guerra el tema fue elemento de constante agitación por parte de los grupos nacionalistas, destacando *La Calle*, que impulsaría años después la Unión Defensora del Petróleo para evitar que éste se devolviera a la Standard Oil.

to, sin embargo, llegaba demasiado tarde, sin que Toro dispusiera de apoyo social consolidado en algún tipo de organización que salvaguardara su permanencia en el Palacio Quemado. A principios de Julio, Germán Busch era proclamado Jefe de la Legión de Excombatientes, claro desaire al presidente de la Junta. Seguro de encarnar las aspiraciones de los hombres del Chaco; empujado por los sectores más radicales, para quienes la nacionalización de la Standard debía ser un primer paso y no un mero expediente excepcional; considerando que Toro deseaba perpetuarse en el mando vulnerando el espíritu de la revolución de mayo: aconsejado también por sectores próximos al patinismo, perjudicado por la preferencia torista en favor de Aramayo y Hochschild, Germán Busch hizo saber a Toro que ya no contaba con la confianza del ejército, y el 13 de julio asumió la jefatura del gobierno.

Sus primeras declaraciones llenaron de júbilo a la prensa conservadora. Su promesa de que «*el paso del ejército por el poder no puede ser sino un puente para salvaguardar el país (...) y llegar a la normalidad civil organizada constitucionalmente*» le fue recordada por los editoriales de *El Diario* con frecuencia.⁵⁵ Tal fue el carácter de las esperanzas despertadas en la derecha y los temores de la izquierda, que Busch hubo de indicar públicamente que no se iba a dar marcha atrás en la nacionalización de la Standard, como se había rumoreado en la capital.⁵⁶ El gobierno constituido al día siguiente del golpe incluía a hombres como Gutierrez Granier, secretario del conservador Partido Centrista, a Gabriel Gosalvez, antiguo miembro del PRS que se convertiría en mano derecha del gobernante, y Enrique Baldivieso, ya sin el apoyo del extinto Partido Socialista. Se contaba, por tanto con las fuerzas de la vieja Bolivia, estableciéndose contactos formales con liberales, genuinos y republicano-socialistas. Dichos partidos firmaron un comunicado conjunto en que se instaba al joven Jefe militar a que convocara elecciones, manifestándole su adhesión al cambio realizado el 13 de julio. Busch respondió indicando que «*mi satisfacción patriótica estaría colmada si, como anhelo y espero, las fuerzas políticas que ustedes representan quisieran prestar también su apoyo y concurso a los ideales de justicia social que se especifican en el programa mínimo de la revolución de 17 de mayo de 1936.*»⁵⁷ ambigua declaración que debía haber preocupado a los dirigentes de los grupos tradicionales más de lo que lo hizo. La «normalización» se completaría aún con mayor ambigüedad, al declarar la vigencia de la constitución de 1880, manteniendo en funciones una comisión de reforma constitucional.

Las tensiones con los partidos tradicionales se manifestaron en pocas semanas. Busch comenzó indicando qué organismos como LEC o la CSTB podrían presentarse a las elecciones, hecho que se interpretó como un resabio del corporativismo de Toro. En noviembre, el ministro de Hacienda, Gutiérrez Granier, abandonaba el go-

55. *El Diario*, 11, 14, 15 y 22 de julio de 1937.

56. Klein, H.: «German Busch and the Era of Military Socialism in Bolivia», *Hispanic American Historical Review*, Vol. XLVII, 2, 1967, pág. 169.

57. Busch, G.: *Rectificación al curso histórico de la revolución de mayo de 1936*. La Paz, 1937, pág. 30.

bierno entendiendo que en él se daban tendencias izquierdistas.⁵⁸ Lo que parece evidente es que Busch estaba buscando apoyos para su candidatura presidencial y, a sabiendas que nunca podría hallarlos en los grupos tradicionales, se inclinó por medias populistas, como la asunción de las labores realizadas por el equipo de Waldo Álvarez acerca de un nuevo Código de Trabajo y procediendo a la reapertura de los almacenes públicos que él mismo había clausurado en julio.⁵⁹ Finalmente, tras la firma del decreto de convocatoria de una Convención Nacional encargada de elegir al presidente de la República y de redactar un nuevo texto constitucional, ordenó el arresto y exilio de Bautista Saavedera, acusándolo de participar en una operación subversiva. Los motivos de un viraje tan pronunciado no son fáciles de establecer. La propuesta a los partidos del antiguo régimen para que colaboraran en la edificación de una Bolivia nueva fue sincera, como también fue efectiva la presión que llevaron a cabo los intereses mineros indicándoles el caos en que se hallaba la Hacienda y el peligro de quiebra del país. Hombres que simpatizan con Busch, como Chávez Ortiz o Céspedes, han tenido que aceptar el peso de tales influencias sobre una persona que se caracterizaba por su profunda inseguridad, sobre todo en temas económicos.⁶⁰ La aceptación de una colaboración con las fuerzas tradicionales no debe entenderse, de manera simplista, como la antesala del traspaso de poderes. Y, en este aspecto, Busch debía recibir también la presión de sus compañeros de armas. La «normalización», aun siendo entendida como el fin de la experiencia militar-socialista, no tenía que tomar necesariamente este camino. Podía tomar el de la institucionalización de los principios del 17 de mayo —a los que Busch nunca había renunciado— a través de una nueva Constitución. Busch se había referido al regreso del ejército a los cuarteles en cuanto se hubiera puesto fin al desorden nacional provocado por la derrota del Chaco. Pero ¿quién iba a suceder a las Fuerzas Armadas en la gestión del país? ¿Los restos de los partidos tradicionales, en proceso de descomposición, rotas sus vinculaciones con su base social y con serias dificultades para adaptarse a la realidad cambiante de la postguerra? En definitiva, Busch había llamado a una participación en el reparto, no a un cambio de protagonista. Y el ejército, acostumbrado a unas dosis de poder de las que había carecido desde 1880, le animó a seguir considerándose indispensable en la salvación nacional y a contemplar con disgusto cualquier asomo de política partidista en la que sistemáticamente creía ver asomar el caudillismo criollo.

Las elecciones a la Convención asistieron a la abstención de los grupos tradicionales, mientras los partidarios de Germán Busch se unían en un prolífico matrimonio de conveniencia donde ingresaron excombatientes, cuadros sindicales, antiguos «socialistas» y nacionalistas radicales. El triunfo arrollador del Frente Único Socialista llevó las distintas lecturas renovadoras de la realidad boliviana por vez primera al parlamento. Incluso las modificaciones del protocolo fueron significativas. Se emi-

58. Díaz Machicao, *op. cit.*, pág. 66.

59. Busch, G.: *Mensaje del presidente de la Junta de Gobierno a la Convención de 1938*, La Paz, 1938, pág. 57.

60. Céspedes, A. *op. cit.*, pág. 155; Chávez Ortiz, Ñ: *El signo del estaño*, La Paz, 1961, pág. 65.

tieron pintorescos juramentos, que aludían a «Cristo, el más grande socialista», a la causa proletaria, a los muertos del Chaco o al libre pensamiento. La Convención de 1938 no sólo legitimó la presidencia de Germán Busch —haciendo de Baldivieso su vicepresidente—, sino que introdujo en la Carta Magna un nuevo concepto del papel del Estado en las relaciones sociales, que las anteriores constituciones habían silenciado totalmente, con una clara influencia de la constitución mexicana de 1917.⁶¹ La Constitución incluyó conceptos como la función social de la propiedad —única garantía de su carácter inviolable—. Se recordaba que eran dominio originario del Estado «todas las sustancias del reino mineral, las tierras baldías con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como todas las fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento económico». La intervención del Estado en la economía se reforzaba en los artículos siguientes, referidos a la regulación o gestión directa del comercio e industria por los poderes públicos y a la exportación del petróleo fiscal y privado a través de instituciones estatales. La Sección XIV, dedicada al «Régimen Social», establecía la protección del Estado sobre trabajo y capital, que al considerarlos factores idénticos de producción encajaba en la línea del «socialismo» tal y como lo entendían la mayoría de los convencionales. Seguían aspectos referentes a la regulación por ley del salario mínimo, asistencia médica, jornada laboral, derecho de asociación, huelga y contrato colectivo, así como la creación de tribunales especiales para intervenir en los conflictos entre trabajadores y empresarios. En los aspectos de política agraria, aun cuando hubo intervenciones radicales —singularmente las de Guevara Arce—, se impuso la prudencia y se pudo detectar el origen urbano de los «socialistas» del Chaco: ni siquiera hubo mención explícita a la abolición del pongueaje, que debía sobreentenderse en otros apartados. La única afirmación positiva fue el reconocimiento del derecho a la existencia de las comunidades.⁶²

Los ataques de los sectores conservadores contra la Convención hubieron de proceder de la prensa, dado que liberales, genuinos y saavedristas —salvo en algún caso aislado— se habían abstenido de participar en los comicios. La dureza de las

61. Sobre la Convención de 1938 y la influencia del movimiento de «constitucionalismo social» que recorrió América Latina, véase Frerking Salas, O.: «Las cláusulas económico sociales en la Constitución política de Bolivia», en Academia de Ciencias Sociales y Económicas de Buenos Aires: *Las cláusulas económico sociales en las constituciones de América*. Buenos Aires, 1947-48. Puede ser útil también el artículo de Klein, H, «Social Constitutionalism In Latin America». *The Bolivian Experience*, en *The Americas*, Vol. XXII, nº 3, 1966, págs. 258-276.

62. Al contrario de lo que sucedía en la constitución de 1880, reformada en 1931, donde la referencia a los servicios personales se presentaba como simple apéndice del artículo 17, referido a la igualdad como base del régimen impositivo, la Constitución de 1938, en la Sección dedicada a «Derechos y Garantías», el artículo 5º indicaba que «nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Los servicios personales sólo podrán ser exigibles cuando así lo establezcan las leyes». El mantenimiento del pongueaje, aun cuando se negara en los términos más genéricos de la norma, podía camuflarse precisamente en la falta de una mención explícita a lo que todos los sectores de izquierda bolivianos contemplan como expresión más clara de la persistencia del feudalismo en el país. Habrá que esperar a 1945 para que el servicio personal más clásico de la sociedad altoperuana sea formalmente revocado, y a 1952 para que desaparezca en términos reales.

acusaciones de *El Diario* llevaron a una larga discusión sobre la libertad de imprenta que concluyó con la aprobación de un decreto de censura.⁶³ El decreto provocó la dimisión del sector más derechista del gabinete, y Busch dio satisfacción a éste negándose a aceptarlo y separando del gobierno a Elías Belmonte, fundador de RA-DEPA y de tendencias fascistas, que se había distinguido en el apoyo prestado al proyecto. Esta victoria conservadora no era más que una jugada de distracción por parte de Busch, pues la Convención actuó desde entonces sin la menor traba del Palacio Quemado.

Aprobada la Constitución en Octubre de 1938, los convencionales iniciaron un receso que no tendría fin, pues las previsiones de qué diputados y senadores volverían a reunirse como Congreso ordinario fueron incumplidas por Busch. El 24 de abril de 1939, el presidente explicó los motivos que le llevaron a proclamar la dictadura: se atacaba el egoísmo de los partidos, que no habían sabido estar a la altura de las circunstancias de la postguerra, a la inmoralidad de la administración; se reconocía el fracaso de la política económica, ejemplificada en el paso de cinco ministros en dos años; señalando la insensatez de los que deseaban enfrentar a civiles y militares —es decir, los que pedían el regreso a un gobierno civil—, Busch concluía indicando que no podía permanecer impasible ante el caos de la nación, y que debía «*emprender una campaña que salve a esta patria que se desmorona (...) El Estado debe ser el regulador justiciero de las relaciones económicas, con el fin humano y profundamente nacional de instaurar un régimen de justicia social, dentro del marco de nuestra actual etapa económica y de las posibilidades del país. Por encima de todas las tendencias extremas, con Bolivia*».⁶⁴

Mientras los partidos de izquierda organizaban un panorama más simplificado que el inmediatamente posterior a la guerra, con la consolidación del P.O.R., la aparición del P.S.O.B. y las tendencias dirigidas a la formación del P.I.R., Busch encontraba graves dificultades para consolidar una base civil de apoyo de su régimen, a la manera del Frente Único Socialista, desintegrado inmediatamente después de las elecciones. Los intensos de formar un Partido Socialista por parte de Baldívieso, Gosálvez o Riverín fracasaron por los desacuerdos con grupos tan destacados como el de *La Calle*, dispuesto a dar apoyo circunstancial al presidente, pero no a convertirse en apéndice palaciego. El reforzamiento orgánico de la izquierda marxista no se vio acompañado de una línea paralela en el seno del «socialismo» moderado y profundamente ambiguo que deseaba encarnar el dubitativo Busch. Los constantes virajes en favor o en contra de los conservadores, que pueden reflejarse en la composición de sus gobiernos, tampoco ayudaban a crear en torno al caudillo un

63. El decreto señalaba concretamente que se facultaba al poder ejecutivo «con carácter extraordinario, para tomar todas las medidas de previsión y represión contra los desmanes y licencia de la prensa nacional de extrema derecha. Esto mientras se dicte una nueva ley de imprenta que, contemplando la realidad boliviana, dé libertades amplias a los órganos de prensa que, por su organización económica y social, sean los verdaderos voceros de la opinión pública». (Citado por Días Machicao, P.: *op. cit.*, pág. 83).

64. Citado en Antezana Ergueta, L.: *op. cit.*, Vol. I, págs. 163 y ss.

círculo de adhesiones entre las clases acomodadas. Los partidos tradicionales se decidieron, por fin, a aceptar la ruptura del marco político de la pre-guerra y, en marzo de 1939, firmaron una alianza electoral conocida como la «Concordancia». La muerte de Saavedra permitió que los republicano-socialistas abandonaran sus viejas veleidades populistas para regresar al seno acogedor de la Bolivia conservadora. A ello se unían las disensiones en el mismo seno del ejército, donde la oposición a la política reformista de Busch iba cobrando cuerpo en torno al general Quintanilla, jefe de las Fuerzas Armadas.

Todos estos fueron factores que contribuyeron a que Busch, para compensar su aislamiento, realizara la huida hacia adelante de la dictadura. Entre su proclamación y el suicidio del presidente, en agosto de 1939, éste llevaría a cabo las dos medidas que —junto a la constitución del 38— le siguen presentando como precursor de la Revolución Nacional de 1952: el Código de Trabajo, con base en los proyectos de Waldo Álvarez, y el decreto de entrega obligatoria de divisas. El Código recogía minuciosamente principios que la Constitución había proclamado en términos generales: la reglamentación de la huelga, la de la salubridad en el trabajo, los derechos de sindicalización, negociación colectiva, vacaciones anuales y descanso dominical, la prohibición del trabajo para menores, etc. A pesar de los aspectos que incidían especialmente en el arbitraje para mediar en conflictos entre «los dos factores de producción», puede considerarse que el Código Busch —tal como fue conocido más tarde— era la regulación de derechos laborales más progresista que había conocido Bolivia hasta la fecha. El decreto de entrega de divisas, por su parte, era el resultado de un viejo litigio entre Estado y empresas privadas. El conflicto entre ambos se había centrado, desde la inmediata postguerra, en la entrega de divisas obtenidas con la exportación. Se fijaron en 1937 entregas porcentualmente distintas según cual fuera la cantidad exportada en favor de los grandes mineros, con la excusa de que así favorecía el aumento de la producción.⁶⁵ Los nacionalistas lograron convencer a Busch de que la política de entrega de divisas propiciada por el ministro de Hacienda Schulze era un fraude al Estado, y el caudillo reaccionó con la destitución fulminante del ministro conservador y el nombramiento de Pou Mont, al que encargó el redactado del decreto del 7 de junio de 1939, que exigía la entrega inmediata del 100% de las divisas de exportación, cambiadas a 140 bs. por libra esterlina. La medida se completaría con la nacionalización del Banco Central y el Banco Minero, dirigidas a controlar más estrechamente las operaciones de cambio realizadas por las grandes empresas.

Las disposiciones fueron acogidas con entusiasmo por parte de trabajadores, estudiantes y jóvenes profesionales, que realizaron una gran manifestación el 15 de junio en apoyo del presidente. Según Céspedes, tras la manifestación, Busch manifestó: *«Yo no he llegado a la Presidencia para servir a los capitalistas. Ellos deben servir al país y si no lo hacen por su voluntad lo harán por la fuerza. Les juro a ustedes, camaradas, que yo, Germán Busch, demostraré a esos Patiños, Aramayos,*

65. Banco Central, *Novena Memoria Anual, La Paz, 1938*, pág. 51.

Hochschildes, a todos los explotadores de Bolivia, que aquí hay un presidente que hará respetar a su país». Tras las primeras semanas de entusiasmo, sin embargo, los motivos que le llevaron a decretar la dictadura, es decir, su profundo aislamiento político, volvieron a asediarse. Sin ser capaz de entregar el poder a la izquierda o a los nacionalistas «socialistas» —cosa que, además, difícilmente hubiera tolerado el ejército—, profundizar en las medidas que se habían iniciado en abril imponía un enfrentamiento con la Bolivia tradicional para el que no se sentía respaldado ni siquiera por la totalidad de los militares. La sensación de impotencia fue adueñándose de una personalidad egocéntrica y neurótica, que en varias ocasiones había intentado suicidarse. En la madrugada del 23 de agosto de 1939, Busch se disparó en la cabeza. En las ocho horas que tardó en morir, el Jefe de Estado Mayor, Quintanilla, arrebató el poder al vicepresidente Baldivieso y organizó el regreso al antiguo régimen.

A modo de conclusión

La restauración del sistema liberal en Bolivia resultaba tan utópica como las aspiraciones renovadoras de aquellos «socialistas» que, como Busch, quisieron transformar el país sin tocar los dos puntos neurálgicos del poder oligárquico: las minas y las haciendas. Tan frágil resultaba la posición de los viejos partidos agrupados en la Concordancia, que tuvieron que proponer como candidato a la presidencia al general Enrique Peñaranda, tras tantos meses de indignación por ver al ejército en posesión del Palacio Quemado. Por otra parte, algunas de las medidas decretadas por Busch resultaban intocables, a no ser que liberales, genuinos y saavedristas quisieran exponerse a una explosión social: la constitución del 38, el código de trabajo, la nacionalización del Banco Central, se mantuvieron bajo el gobierno «restaurador» de Pañaranda. Sólo el sufragio restringido permitía que los conservadores se mantuvieran en el poder y, aún así, incluso en los sectores con derecho a voto se observaba un deslizamiento hacia el P.I.R. o el M.N.R. La sumisión a la política internacional de los Estados Unidos permitió que los nacionalistas formados en el trienio de reformismo militar denunciaran ante la opinión boliviana la venta de materiales estratégicos a un precio «solidario». Acciones salvajemente represivas como la masacre de Catavi de 1942 estaban estrechamente relacionadas con la necesidad de abastecer a las potencias que luchaban contra el Eje. Y ello acabaría haciendo mella en el ejército, donde RADEPA había conseguido consolidarse hasta el punto de expulsar del Palacio Quemado a una alianza de partidos huérfana del más pequeño apoyo popular. El golpe de diciembre de 1943 abriría una nueva experiencia de reformismo compartido por radepistas y dirigentes del M.N.R. Aunque la experiencia fue cancelada por la «revolución» en la que el P.I.R. fue del brazo de liberales y republicanos, firmando su suicidio político, ello no hizo sino clausurar las vías de la reforma y forzar una estrategia de insurrección popular que se concretaría en la revolución nacional de 1952. Esta revolución iría mucho más lejos de lo que había imaginado los hombres de la crisis del Chaco: nacionalización de las minas, reparto de tierras entre los indígenas, sufragio universal, disolución del ejército, sustituido por milicias

obreras y campesinas... Los protagonistas de la revolución de abril se legitiman refiriéndose, como antecesores, a los «presidentes mártires», Busch y Villarreal. El reformismo de 1936-39 no fue sin embargo, una operación de las mismas características: la fractura del orden liberal no encontró una alternativa civil organizada y la intervención del ejército creó situaciones de extrema ambigüedad, sin que pueda hablarse en absoluto de una marcha decidida a la transformación de las relaciones sociales bolivianas de pre-guerra. Tampoco es demasiado sensato esperar que el ejército actúe como vanguardia histórica de tales cambios. ¿Qué sectores las reclamaban con claridad de objetivos y amplia base social al mismo tiempo? Ni el descontento generalizado por la crisis de los años treinta, ni el doctrinarismo estrecho de algunos grupos escuálidos y escasamente relacionados con las capas populares podían impulsar dichas transformaciones por separado. La protesta contra el orden de cosas existente, que se hizo casi unánime tras el desastre del Chaco, no había conectado aún con una alternativa. El prestigio del término «socialismo» era una simple aproximación intuitiva, y la obsesión por maquillarse con la palabra no se correspondía casi nunca con la voluntad de darle su auténtico significado, es decir, la socialización de la riqueza. No puede decirse que el ejército actuara en aquellos momentos suplantando una revolución civil en marcha, a pesar de que algunos contemporáneos confundieran la agitación urbana y algunos episodios aislados de resistencia indígena con una revolución. Incluso aunque los sectores más acomodados respiraran con alivio al ver a los militares ocupando el poder tras el irreversible desprestigio de los grupos tradicionales, ello no significa que Toro y, sobre todo, Busch, asimilaran esa función de paréntesis histórico que la oligarquía pretendía asignarles. Toro y Busch se limitaron a asimilar las ideas de renovación y clausura de la vieja Bolivia con toda la carga de confusión de conceptos, penumbra de estrategias y desorden de alianzas que la misma sociedad civil les transmitía. La sinuosa historia de su mandato responde en algunos episodios concretos a cuestiones personales, pero en conjunto es el reflejo de un comportamiento ideológico nada rectilíneo por parte de una sociedad en crisis. En este sentido, la capacidad de maniobra de Toro y la brusca honestidad de Busch son las dos caras de un mismo proceso: el intento, por parte de una pequeña vanguardia intelectual, apoyada en un sector minoritario del ejército, de dar forma a un proyecto de modernización. Su horizonte no iba más allá del reforzamiento del Estado frente a los grandes mineros, a darle capacidad de inversión en el interior del país, a diversificar la economía sustituyendo importaciones por lo que pudiera producir una inexistente burguesía nacional. Habrá que aguardar a 1952 para descubrir que, en ciertas latitudes, incluso la reforma necesita de una revolución.